

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACOGIDA Y ASISTENCIA A PERSONAS SIN HOGAR EN SITUACIÓN DE CONVALECENCIA

La Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en su reunión de 11 de octubre de 2016, incluye como uno de los grupos sociales más vulnerables a los que destinar esfuerzos sociales, el de las personas sin hogar.

La citada Estrategia, ya reconoce que entre todos los problemas que padece este sector de población, los riesgos de salud son graves y la cobertura mediante prestaciones sociales es baja, y la Estrategia ya prevé que se elaboraría una estrategia específica para este colectivo en su Eje 2 “Refuerzo servicios sociales y apoyo a personas en pobreza y exclusión social” y dentro de él en el objetivo 16. Pero en un centro sociosanitario como el que nos ocupa no podemos dejar de citar tampoco el objetivo 4. Políticas de salud inclusivas, en el que se afirma que se pretende *“Mejorar la salud de las personas con peores niveles de salud en comparación con la media de la población, en especial las personas sin hogar ...”*

La citada Estrategia específica prevista en la Estrategia de Inclusión Social, cristalizó en el Plan de Inclusión de Personas sin Hogar de la Comunidad de Madrid 2016-2021, aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 29 de noviembre de 2016.

Éste Plan prevé entre otras cosas una atención especializada a convalecientes *con residencias especializadas -con un menor número de personas por habitación- para quienes reúnen características de edad, dependencia, convalecencias, tratamientos especializados -de salud mental, desintoxicación o rehabilitación-, protección de la violencia u otras circunstancias que lo aconsejen. En todo caso, los alojamientos especializados dispondrán de habitaciones con tres o menos plazas o en las condiciones que establezcan los profesionales sociosanitarios.*

Por lo tanto es aquí en donde encaja el mantenimiento de un dispositivo sociosanitario como el que se plantea en el contrato que ahora se tramita.

Como fundamento de este Centro, también debemos referirnos al artículo 2 de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid establece como finalidad de los servicios sociales la promoción del bienestar de las personas, la prevención de situaciones de riesgo y la compensación de déficits de apoyo social, centrando su interés en los factores de vulnerabilidad o dependencia que, por causas naturales o sobrevenidas, se puedan producir en cada etapa de la vida y traducirse en problemas personales. Los servicios sociales deben asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de la vida, teniendo las necesidades sociales cubiertas.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1296335319855696457336**

Este Centro está pensado para atender a personas sin hogar que o bien son terminales y por lo tanto están necesitadas de un lugar del que carecen por su situación de calle para poder seguir sus tratamientos médicos, o bien necesitan de una intervención médica que precisa de un preoperatorio o de un postoperatorio, que no es viable por carecer de un hogar en el que hacerlo. Es decir, se trata de atender a aquellas personas que, además de encontrarse en una situación de exclusión social extrema, están pasando un proceso de convalecencia o de enfermedad grave y crónica y precisan de cuidados que no pueden obtener por carecer de vivienda y de los apoyos personales y familiares adecuados.

Para este fin se hace necesario proporcionar a estas personas una solución de alojamiento, en un dispositivo de capacidad media/baja, en el que puedan hacer uso de los recursos que el sistema sanitario pone a disposición de este tipo de usuarios del mismo modo que cualquier otro ciudadano lo hace en su propio domicilio en idénticas circunstancias de salud. La alternativa a este recurso además sería más cara en términos económicos pues supondría el uso de recursos sanitarios de alta intensidad, que tienen un alto coste, pero además implica el uso de unos recursos médicos que no suelen tener el aspecto social que las personas sin hogar necesitan trabajar, lo que implicaría no solo utilizar los recursos de forma antieconómica, también de forma ineficiente.

Las personas sin hogar constituyen uno de los rostros más visibles de la exclusión social, teniendo un origen multicausal que hay que atender desde una perspectiva transversal. La Comunidad de Madrid viene impulsando actuaciones con personas sin hogar, tanto en la garantía de recursos económicos a través de la renta mínima de inserción, como en otros ámbitos de actuación (financiación de proyectos de inserción socio laboral, Convenios con otras Administraciones y entidades para la atención a personas sin hogar, etc.), sin olvidar la labor que se realiza a través de las Unidades Móviles de emergencia social.

Nos encontramos además ante un dispositivo pionero en España, que fue puesto en servicio mediante contrato público en el año 2015 siguiendo experiencias piloto de algunas entidades sociales con la financiación de las subvenciones del 0,7 % de la recaudación del IRPF que en aquel momento gestionaba la Administración Estatal, y que después ha sido replicado en algunos otros territorios autonómicos aunque con Centros más pequeños.

No se trata de aumentar la capacidad de alojamiento de los recursos residenciales para personas sin hogar ya existentes, ni de crear un nuevo recurso residencial. Se trata de focalizar la atención a personas sin hogar que presentan unas necesidades de atención concretas. El servicio objeto del contrato no es un recurso sanitario, sino un recurso eminentemente social y especializado, que permite la atención adecuada a estas personas tras abandonar la atención hospitalaria, pero garantizando el entorno y apoyos adecuados para un correcto seguimiento ambulatorio de su enfermedad, y en el que sus profesionales mantengan la debida coordinación con los recursos sanitarios públicos de atención primaria y especializada correspondientes, garantizando al mismo tiempo la coordinación con el Sistema de Servicios Sociales para que en el momento de la salida del recurso residencial la persona pueda acceder a las prestaciones que dicho sistema pone a su disposición, en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.



Se hace, por tanto, necesario proporcionar un entorno convivencial digno a estas personas en momentos tan duros y difíciles, lo que constituye suficiente motivo para el mantenimiento de un dispositivo como el que aquí se propone, pero además también existen otros motivos relacionados con la eficiencia de la utilización de los recursos sanitarios hospitalarios (más costosos y menos adecuados a las circunstancias de salud descritas).

En abril de 2015 la Dirección General de Servicios Sociales (actualmente Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social) puso en marcha un servicio de “Acogida y asistencia a personas sin hogar en situación de dependencia”, gestionado mediante un contrato administrativo cuya prórroga finaliza el 31 de diciembre de 2016. Este servicio tiene las mismas características esenciales que el que ahora se propone para su licitación. La única modificación de fondo que se ha realizado es la eliminación en el perfil de los usuarios del requisito de tener reconocido o solicitado un grado de dependencia. Las circunstancias prácticas en el desarrollo del servicio han puesto de manifiesto el hándicap que supone este requisito, ya que la mayoría de los casos atendidos no han derivado en una situación de dependencia, sino en la mejoría notable de la salud y la superación de la necesidad de apoyos permanentes. La solicitud de reconocimiento de dependencia se tramitaba con el único objeto de ser admitidos en este recurso residencial, dando lugar a una sobrecarga innecesaria de trabajo para la Dirección General competente en materia de dependencia. Estas razones han hecho aconsejable la eliminación de este requisito en el perfil de los usuarios.

Mediante el contrato actualmente vigente que finaliza el próximo 31 de diciembre de 2020, se han gestionado 40 plazas. En los últimos seis meses la ocupación ha sido superior al 90%, lo cual evidencia la necesidad de dar continuidad al servicio y de ampliarlo para poder dar respuesta a la necesidad social puesta de manifiesto. Por ello esta Dirección General se propone la ampliación del recurso de 40 a 60 plazas.

Madrid, 18 de junio de 2020

LA DIRECTORA GENERAL DE
SERVICIOS SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL

Fdo.: Gema Gallardo Pérez

